

Medellín, agosto 26 de 2020

Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (REPARTO)
SALA DE CASACIÓN PENAL
Bogotá

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA contra la sentencia SL 15240 - 2017, Radicación N° 53154, Acta N° 10 de 12 de septiembre de 2017, notificada por edicto el 28 de septiembre de 2017, pronunciada por la CSJ, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión N°2, M.P. SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO, y contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, de fecha 13 de diciembre de 2010 MP Guillermo Cardona Martínez.

ACTORES: CARLOS JULIO ZAPATA ZAPATA y OTROS

CARLOS JULIO ZAPATA ZAPATA, GONZALO CARMONA HOYOS y MARTA CECILIA RIVAS CORREA, mayores de edad y vecinos de Medellín, con todo respeto interpongo acción de tutela contra los fallos de la referencia, previos los siguientes:

I. HECHOS y FUNDAMENTOS:

1. Prestamos el servicio al Departamento de Antioquia- Fábrica de Licores de Antioquia, FLA- desde las siguientes fechas:

CARLOS JULIO ZAPATA ZAPATA	F. Ingreso
GONZALO CARMONA HOYOS	13 NOV. 1996
MARTA CECILIA RIVAS CASTRO	13 ABR. 1989
	13 ENE. 1978

2. Desempeñamos los siguientes oficios:

	Cargo
CARLOS JULIO ZAPATA ZAPATA	Operario
GONZALO CARMONA HOYOS	Operario
MARTA CECILIA RIVAS CASTRO	Auxiliar de servicios generales.

3. La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia es una UNIDAD DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA con fines de lucro, compite en el mercado con otros productos de la misma naturaleza y además es susceptible de ser propiedad de los particulares, a tal punto que últimamente se ha hablado de la necesidad de su privatización. Además, se trata de una EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, así definido por el Consejo de Estado, Corporación que anuló los decretos que la adscribieron a la Secretaría de Hacienda del Departamento (Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, 21 de junio de 2018).

4. Existe en la Fábrica de Licores de Antioquia un sindicato de industria denominado SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS "SINTRABECOLICAS", con personería jurídica 004425 de 15 de noviembre de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
5. El Sindicato siempre había negociado las condiciones de trabajo de sus afiliados. En tal dirección, dicha organización sindical presentó (como siempre) un pliego de peticiones a la demandada el día 27 de noviembre de 2000, conflicto que a la fecha no se ha solucionado porque la Fábrica de Licores y el Departamento de Antioquia, con razones contrarias a derecho y a los convenios de la OIT sobre la materia, se ha negado a negociarlo, dándole la razón a la comunidad internacional que en repetidas oportunidades le ha llamado la atención al Estado Colombiano por el incumplimiento de los convenios relativos a los derechos y principios fundamentales en el trabajo, específicamente los de negociación y contratación colectiva.
6. Los suscritos estábamos y estamos afiliados a la organización sindical SINTRABECOLICAS y por tanto estábamos y seguimos protegidos por la garantía del **FUERO CIRCUNSTANCIAL**.
7. Fuimos despedidos sin justa causa PREVIAMENTE comprobada y estando sin solución el pliego de peticiones, esto es, estando protegidos por las normas que garantizan la estabilidad en conflicto colectivo, impidiéndonos el ejercicio de nuestros derechos fundamentales de asociación y negociación colectiva.
8. La Empresa Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia –FLA- como otras Fábricas Licoreras del país, venía celebrando convenciones colectivas con sus trabajadores, hasta cuando resolvió negarse a negociar el pliego con el evidente propósito de desconocer los derechos fundamentales de los trabajadores y de su Organización sindical.
9. Nuestro despido tuvo como propósito debilitar el Sindicato, mayoritario, además, impedirnos el derecho libre de asociación, violar el derecho de contratación colectiva y a desmejorarnos y quitarnos el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil y a un trabajo decente. Era el inicio del neoliberalismo.
10. El Estado colombiano, incluida la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, desconoce y persigue los derechos humanos, abomina la democracia participativa y el libre ejercicio de los derechos, y desconoce la Carta Superior y los tratados públicos.
11. Es muy importante anotar que el pliego presentado por SINTRABECOLICAS debió ser negociado por resolución 0749 de 2001, expedida por el Ministerio de Trabajo, juzgada y en firme por el H. Consejo de Estado por sentencia que resuelve la demanda impetrada por el propio Departamento de Antioquia, expediente 1135-02, de 30 de junio de 2005, a la cual se sustrae tanto el Departamento como la FLA, de forma fraudulenta. A la fecha, la Entidad aún no ha querido solucionar el conflicto.

12. A raíz de nuestro despido, iniciamos el proceso por fuero circunstancial ante la justicia ordinaria laboral contra el Departamento de Antioquia-Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, FLA- que terminó con sentencia parcialmente **favorable**, dictada el 6 de noviembre de 2009 por el Juzgado 7 Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, radicado 05001310501620060090201:

"PRIMERO: Se DECLARA que la terminación del contrato ocurrido a los señores Carlos Julio Zapata Zapata, Gonzalo Carmona Hoyos y Marta Cecilia Rivas Castro fue injusto y estando aquellos amparados por fuero circunstancial.

SEGUNDO: Se **CONDENA** al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, representada legalmente por Aníbal Gaviria, o por quien haga sus veces, a pagar a cada uno de los señores Carlos Julio Zapata Zapata, Gonzalo Carmona Hoyos y Marta Cecilia Rivas Castro la suma de **diez (10) salarios mínimos** legales vigentes, por concepto de indemnización de perjuicios morales, por los señalamientos relacionados en la parte motiva.

TERCERO: Se **ABSUELVE** al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, representada legalmente por Aníbal Gaviria, o por quien haga sus veces, de reintegrar a los demandantes por las razones relacionadas en la parte motiva.

Costas a cargo de la parte demandada, como quedó señalado en la parte motiva". (Resaltos fuera de texto).

13. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el H. Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, M.P. Guillermo Cardona Martínez, el 13 de diciembre de 2010, así:

"... CONFIRMA íntegramente lo decidido en la primera instancia.

Costas como se dejó dicho".

14. Se interpuso recurso de casación y por sentencia pronunciada por la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión N° 2 Radicación N° 53154, Acta No 10 de 12 de septiembre de 2017, notificada por edicto el 28 de septiembre de 2017, M.P. Santander Rafael Brito Cuadrado, dispuso:

"NO CASA la sentencia del 13 de diciembre de 2010, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que MARTA CECILIA RIVAS CORREA, GONZALO CARMONA HOYOS Y CARLOS JULIO ZAPATA ZAPATA le promovieron al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y a la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (FLA).

Costas como se dijo en la parte motiva".

15. La Sala de Descongestión confundió dos situaciones que se han ventilado en la Corte, a saber: a) Las demandas de reintegro por fuero circunstancial derivadas de los despidos ocasionados con la supresión de todos los cargos de trabajadores oficiales en la Secretaría de Infraestructura física, en los que se absolvió al Departamento de Antioquia. Y b) Las demandas instauradas por un grupo de trabajadores, nosotros incluidos, por haber sido desvinculados de la FLA, por negarse el departamento a negociar el pliego de peticiones, demandas todas ganadas por los trabajadores por decisión unánime de la Corte. ¿Qué sucedió?: equivocadamente enviaron

el expediente nuestro de la Corte Suprema de Justicia titular, a la Sala de Descongestión, y ésta, equivocadamente asumió su conocimiento y nos aplicó la jurisprudencia de la Corte respecto de los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura física, en sentencia de 2 de noviembre de 2017.

16. Contra la anterior decisión se propuso un **incidente de nulidad constitucional por violación al debido proceso**, con los fundamentos que se exponen a continuación, porque esa Sala de Descongestión no era competente para resolver nuestro caso. Veamos:

"1. El Despacho en el caso de la referencia, aplicó el reparto en virtud de lo previsto en la Ley 1781 del 20 de mayo de 2016 –que modificó los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996–, el Acuerdo PCSJA17-10647 del 22 de febrero de 2017 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura y Reglamento de la Sala de Casación Laboral – Acuerdo N° 48 del 16 de noviembre de 2016 -.

2. El Acuerdo No. 48 de Noviembre 16 de 2016, en sus artículos 26 y 28, dispone:

"Artículo 26. Función, delimitación y competencia de las salas de descongestión. Las salas de descongestión actuarán de forma transitoria y tendrán como único fin tramitar y decidir los recursos de casación que determine la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que incluye proferir la decisión de reemplazo. Los magistrados de descongestión no harán parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y no tendrán funciones administrativas. Las salas de descongestión actuarán independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, **pero cuando la mayoría de los integrantes de una de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverá el expediente, acompañado del proyecto al despacho de origen para que la sala de casación permanente decida.**

Artículo 28. Selección de expedientes. Para la selección de expedientes a remitir a las salas de descongestión se tendrá en cuenta su antigüedad, **salvo que impliquen modificar, unificar o crear nueva línea jurisprudencial.** A juicio de los magistrados permanentes, también podrán ser enviados en cualquier tiempo aquellos expedientes donde haya solicitud de celeridad debidamente comprobada, lo cual implicará la compensación". (negritas y subrayas extratexto).

3. Lo anterior significa que a los demandantes no se les aplicó el debido proceso en el sentido que la Sala de Descongestión tenía que proceder a: **"devolverá el expediente, acompañado del proyecto al despacho de origen para que la sala de casación permanente decida"** por ser **"procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva"**, conforme lo indican sus artículos anteriormente transcritos.

4. El Despacho al tramitar el proceso se arrogó una competencia que le corresponde exclusivamente al Despacho de origen, quien es el facultado para decidir el recurso. De esta manera, el Despacho violó el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica.

5. De manera apresurada y sin tener en cuenta el debido proceso, se tramitó así el proceso, miremos la actuación: el día 8 septiembre de 2017 registro proyecto; el 12 septiembre de 2017 se dictó la sentencia - no casa sin costas en el recurso por cuando no hubo réplica; el 27 septiembre 2017 se fijación edicto notificación sentencia y pasa a secretaría para notificar y el 24 octubre de 2017 fue remitido expediente Despacho de origen mediante oficio:10218 enviado a: - 000 - laboral - Tribunal Superior de Distrito Judicial - Medellín (Antioquia)".

17. El incidente fue resuelto por la H. Corte Suprema de Justicia, por el M.P. Santander Rafael Brito Cuadrado el 8 de mayo de 2018, así:

“Rechazar de plano la solicitud de nulidad propuesta de conformidad con la parte motiva”.

18. Posteriormente se solicitó la **nulidad de todo lo actuado** el 4 de febrero de 2019. Para una mejor ilustración, transcribo los fundamentos con las siguientes razones y fundamentos:

“1- Mis mandantes promovieron demanda ordinaria laboral, con la que persiguieron que se declarara que ostentaban la condición de TRABAJADORES OFICIALES de esta última entidad y que fueron despedidos sin justa causa, mientras se encontraba en curso un conflicto colectivo de trabajo, promovido por la organización sindical SINTRABECOLICAS, a la cual se encontraban afiliados. Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaban en el momento de su desvinculación o a otro de igual o superior categoría, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, la indexación y los perjuicios morales, a título de indemnización.

2- El Juzgado de Primera Instancia, que lo fue el Séptimo de Descongestión Laboral del Circuito de Medellín, con sentencia del 6 de noviembre de 2009, resolvió así:

“**PRIMERO:** Se DECLARA que la terminación del contrato ocurrido a los señores Carlos Julio Zapata Zapata, Gonzalo Carmona Hoyos y Marta Cecilia Rivas Castro fue injusto y estando aquellos amparados por fuero circunstancial.

SEGUNDO: Se **CONDENA** al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, representada legalmente por Aníbal Gaviria, o por quien haga sus veces, pagar a cada uno de los señores Carlos Julio Zapata Zapata, Gonzalo Carmona Hoyos y Marta Cecilia Rivas Castro la suma de diez (10) salarios mínimos legales vigentes, por concepto de indemnización de perjuicios morales, por los señalamientos relacionados en la parte motiva.

TERCERO: Se **ABSUELVE** al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, representada legalmente por Aníbal Gaviria, o por quien haga sus veces, de reintegrar a los demandantes por las razones relacionados en la parte motiva”.

3- Por apelación de los demandantes, conoció del proceso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, quien, con sentencia del 13 de diciembre de 2010, confirmó la de primer grado.

El Tribunal, para decidir en la forma como lo hizo, recordó que, según jurisprudencia del Consejo de Estado, específicamente la del 30 de junio de 2005, expediente 1135 - 02, los servidores de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, son trabajadores oficiales, a excepción a los que desempeñan cargos directivos, supuesto en el que no se encontraban los demandantes.

4- Frente a tal decisión se interpuso el recurso de casación el cual fue concedido.

5- Una vez llega el expediente a la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral se da el trámite de rigor, se presenta la demanda de casación, se da traslados a los opositores.

6- el 30 de mayo de 2017 se decide por la Corte remitir el expediente a la Sala de Descongestión Laboral.

7- La Remisión del presente expediente desconoció la ley 1781 de 2016, como los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo No 48 de 2016, por lo siguiente:

El caso que se sometió a estudio, revestía e especial connotación, pues no se estaba discutiendo la improcedencia del reintegro por la supresión del cargo, lo que se discutía y era el quid del asunto era que los demandantes eran TRABAJADORES OFICIALES y como tales tenían derecho al reintegro a su puesto de trabajo con el pago de prestaciones legales, extralegales indexadas, por cuanto prestaban sus servicios en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia que según el Departamento de Antioquia es una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento, no tiene personería jurídica, goza de autonomía administrativa o patrimonio propio, y que el ente demandado los consideraba como empleados públicos.

En el sub judice no se trataba de una reiteración jurisprudencial, si no que la Corte en pleno creara y fijara una posición jurisprudencial sobre quienes son trabajadores oficiales en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, si gozaban de fuero circunstancial y si por ende debían ser reintegrados a sus puestos de trabajo o no por la "reestructuración administrativa", que de paso tampoco impide el reintegro, como lo ha enseñado la misma Honorable Corte así:

"Ahora bien, la Sala debe aclarar que la supresión de la plaza de empleo anunciada en las cartas de despido no constituye impedimento válido para ordenar el reintegro, en la forma pedida. En efecto, esta sala de la Corte ha advertido en anteriores oportunidades que las cláusulas que disponen el reintegro de trabajadores, bien que provengan de disposiciones legales, acuerdos convencionales o garantías como el fuero circunstancial, en tanto intereses particulares, deben ceder ante intereses generales como los que se traducen en las facultades del Estado de reorganizar, suprimir y liquidar sus entidades administrativas, y, como consecuencia, eliminar cargos. Ante dicho panorama, se ha precisado, las medidas de reintegro se tornan de imposible cumplimiento. (Ver CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 33888, CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 39325, entre muchas otras).

Sin embargo, la Corte también ha precisado que:

[...] esa misma doctrina ha sido morigerada para los casos en los que las reestructuraciones administrativas provienen de las mismas entidades, se limitan a la supresión de cargos y no encuentran respaldo en el resguardo de bienes de interés superior. En tal caso, ha dicho la Corte, no puede concluirse automáticamente que el reintegro es de imposible acatamiento, sino que es necesario verificar que la reorganización y supresión de cargos estuvo precedida de estudios especializados que aconsejen el reordenamiento administrativo, de manera que se acredite el cumplimiento y realización de intereses superiores, que prevalezcan sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. En la sentencia CSJ SL, 16 sep. 2008, rad. 33004, reiterada, entre otras, en la CSJ SL576-2013 y CSJ SL16218-2014, se dijo al respecto:

Para la Sala las normas de carácter general dictadas en relación con la estructura, organización y desarrollo de las funciones de las entidades públicas, que persigan una finalidad como la plasmada en el artículo 20 transitorio de la Carta Política, de poner en consonancia la estructura del Estado y de sus organismos, con el diseño constitucional de la estructura del Estado, que con ella sea adoptada, se consagran con el fin de realizar de la mejor manera los fines esenciales del Estado, y por ello están revestidas de un rango de prelación sobre aquellas que consagran los derechos individuales, y aún colectivos del Trabajo.

Las normas laborales legales o convencionales que garantizan la estabilidad en el empleo y las especiales que son desarrollo de mandatos constitucionales, han de tener cabal aplicación, lo cual no significa que lo sea de manera absoluta, aún frente aquellos eventos en que se hace imperioso reordenar la administración.

Pero esta postura jurisprudencial no puede hallar automático acomodo frente a cualquier acto administrativo que provenga de un ente descentralizado del orden territorial tendiente a modificar, ajustar o disminuir la planta de personal y que entrañe supresión de cargos, pues de su mera legalidad no puede inferirse la realización de los intereses superiores de la Administración Pública de ordenarse bajo reglas de eficiencia, procurando el mejoramiento del servicio, propendiendo al equilibrio entre ingresos y egresos.

El ejercicio de la autonomía administrativa de la que gozan las entidades descentralizadas territoriales no es garantía per se de tratarse de actuaciones que estén revestidas de la excepcionalidad y racionalidad que se exige para que primen los intereses públicos sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores; ningún sistema de derechos está garantizado si su disfrute pende de que el deudor, y sólo el, ejerciten o no acciones que los hagan inanes.

Por esta razón el mero acto administrativo de la entidad demandada por la que se auto - autorizo para ajustar su planta de personal y suprimir cargos, no es suficiente para declarar la existencia de un interés público que tenga primacía sobre la eficacia de las garantías convencionales de estabilidad de empleo a las necesidades de la administración; esta debe resultar de estudios que aconsejen el reordenamiento administrativo, y que persuadan de cómo el sacrificio de los trabajadores que pierden su empleo, se justifica por la realización de un interés superior, como el de hacer más eficaz, o menos superflua la administración, o para propender al nivel de gasto que le permite su situación financiera. Resalta la Sala. (CSJ SL8939-2015, reiterada en CSJ SL14019-2016)."

La Sala cuando envió el expediente desconoció la constitución en especial el debido proceso, la Ley 1781 de 2016 y su acuerdo regulador No 48 de 2016.

8- La Sala de Descongestión No 2 recibe el expediente y emite la sentencia SL 15240 DE 2017, donde no casa el proceso y para fundamentar su fallo se sustenta en las sentencias SL8939-2015, y SL14019-2016, y considera que cuando hay reestructuración administrativa no hay reintegro.

9- Frente a tal decisión se le solicitó una nulidad a la sala de descongestión quien negó la misma, indicando:

"Bajo el supuesto que hay cambio de jurisprudencia, que no lo hubo, pues en este caso, no se produjo un viraje jurisprudencial en torno a la improcedencia del reintegro por la supresión del cargo, ya que se transcribió apartes de la sentencia CSJ SL14019-2016 que reiteró la CSJ SL8939-2015, que trató sobre el tema que se propuso en el recurso extraordinario, y que fueron proferidas en juicios seguidos contra el Departamento de Antioquia, que funge como demandada en este proceso. De allí, que no se hubiera actuado en desmedro de la norma con la que se sustenta la nulidad, pues no se consideró, variar los criterios que sobre ese aspecto tiene decantada la Sala permanente."

10- Es claro que la Sala de Descongestión también desconoció de manera flagrante la jurisprudencia que tiene la Sala Plena sobre la posibilidad de reintegrar a trabajadores oficiales cuando se aduce una reestructuración administrativa, y así lo enseñó la Corte en las sentencias SL8939-2015, y SL14019-2016, en las mismas que se fundamenta la de descongestión para casar la sentencia.

La Posición de la Sala de Descongestión genera una inequidad e injusticia con los trabajadores, pues otros compañeros de trabajo en idénticas condiciones fueron reintegrado por la Sala Plena (SL4782 de 2018) y ellos no!!".

19. La anterior nulidad propuesta fue resuelta por el mismo magistrado SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO, AL824-2020, Radicación N° 53154, Acta de 2 de marzo de 2020, así:

"De nuevo, rechazar de plano la solicitud de nulidad propuesta, de conformidad con la parte motiva.

En firme esta providencia, remítase al Tribunal o juzgado de origen en donde se encuentre el expediente, para que sea anexado al cuaderno de la Corte.
Sin costas".

Por considerar:

"Al respecto, se remite la Sala y reitera lo expresado al resolver la solicitud de nulidad propuesta con memorial del 2 de noviembre de 2017, a través del auto CSJ AL2018-2018, del 8 de mayo de la misma anualidad, cuya razón de la decisión se transcribió en los antecedentes de esta providencia".

20. Como puede apreciarse, las dos nulidades propuestas fueron negadas, por el mismo magistrado, de manera equivocada, con desconocimiento de las siguientes situaciones:

- a) El tema sometido a consideración de la Corte en la demanda de casación es **nuevo**, pues lo que se está discutiendo es que los suscritos somos TRABAJADORES OFICIALES, y como tales teníamos derecho al REINTEGRO, pues en el caso no se trataba de una reiteración jurisprudencial, sino que la Corte en pleno creara y fijara una posición jurisprudencial sobre quienes son trabajadores oficiales en la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, si gozábamos de fuero circunstancial, y si por lo mismo, debíamos ser reintegrados.
- b) La Sala cuando envió el expediente a Descongestión desconoció la Constitución, en especial el debido proceso, la Ley 1781 de 2016 y su Acuerdo regulador 48 de 2016.
- c) La Sala de Descongestión N° 2 recibe el expediente y emite la sentencia SL 15240 de 2017, disponiendo NO CASAR la sentencia, con fundamento en las sentencias SL 8938-2015 y SL 14019-2016, concluyendo que cuando hay reestructuración administrativa no hay reintegro, *tema que no es el tratado en los casos de la FLA.*

- d) El Magistrado Brito no oyó razones y tomó en cuenta una jurisprudencia de otro caso MUY DISTINTO, pues tuvo en cuenta los casos de los trabajadores de Infraestructura física, todos perdidos por los trabajadores en la Corte. Pero, no el caso de los trabajadores de la FLA, todos ganados en la Corte en sala plena.
- e) La posición de la Sala de Descongestión N° 2 genera una inequidad, injusticia y violación del debido proceso con los suscritos, pues los otros compañeros de trabajo que demandaron en idénticas condiciones fueron REINTEGRADOS por la SALA PLENA (SL 4782-2018) y nosotros no!!

REQUISITOS GENERALES PARA LA ACCIÓN DE TUTELA

REQUISITO	CASO CONCRETO
1. Relevancia constitucional.	Con la actuación judicial que se impugna, se violentaron derechos de carácter constitucional, que constituyen el “suelo axiológico”: Art. 53 de la C.P. La igualdad real, art. 13, y convenio 111 de la OIT sobre derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación. Arts. 25 y 39 de la C.P. y convenios 87 y 98 de la OIT, derechos de libertad sindical y los principios fundantes art. 1 C.P. (Dignidad humana, trabajo y solidaridad).
2. Agotamiento de recursos judiciales.-	Se agotó el procedimiento ordinario laboral tanto en primera como en segunda instancia, y con el recurso extraordinario de casación. Además, dos nulidades por distintas causas. No existe otro recurso judicial pendiente.
3. Inmediatez.-	<p>Como contra la sentencia de 12-09-17 se interpusieron dos incidentes de nulidad, en el último de los cuales se pidió la nulidad de todo lo actuado, lo resuelto quedó ejecutoriado el día 18 de marzo de 2020, lo cual significa que estamos dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de ésta última decisión.</p> <p>No obstante, téngase en cuenta que la norma del Art. 86 de la C.P. no pone límite en el tiempo, pues los derechos humanos son IMPRESCRIPTIBLES e inherentes a la persona humana, art. 94 de la C.P.</p>
4. Que si se fundamenta la tutela en una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que estima violatoria de los derechos fundamentales.-	La tutela se interpone porque se invocó por la sala de descongestión como precedente, un asunto completamente ajeno a los casos tramitados en la Corte contra el Departamento de Antioquia, FLA, todos favorables a los intereses de los trabajadores, en jurisprudencia de Sala plena. Nosotros somos los infortunados: a) Lo repartieron a la sala de descongestión; b) Esta lo

	asumió y lo fallo con una jurisprudencia que resolvió un caso completamente distinto; c) no hubo manera de que esa tremenda equivocación la entendiera el Magistrado de descongestión. La violación del derecho de defensa art. 29 de la C.P, salta a la vista con evidente culpa grave del operador.
5. Que el tutelante identifique los hechos que generan la vulneración de sus derechos y que, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso judicial.	Los hechos que generan la vulneración fueron cuestionados al interior del proceso ordinario, expuestos claramente en las nulidades propuestas y en la demanda cuyos hechos son claros e inconfundibles.
6. Que el fallo censurado no sea de tutela	Se atacan sentencias producidas dentro del proceso ordinario laboral.

CAUSALES ESPECÍFICAS DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

La decisión cuestionada se torna en vía de hecho y por tanto procede su revisión con apoyo en las sentencias SU-769 de octubre de 2014, SU 230 de abril de 2015 y T-514 de agosto de 2015.

CAUSAL	CONFIGURACIÓN
1. Defecto orgánico por carencia absoluta de competencia del funcionario judicial que dicta la providencia judicial.	Si se configura. La demanda de casación es nueva, lo que indica que es del resorte exclusivo de la Sala Plena para "crear" o "modificar" jurisprudencia. Y sólo a partir de esa decisión por la Superioridad del órgano de cierre, le sería dado a la Sala de Descongestión aplicar la línea fijada por la Corte, la usurpación de funciones es alarmante para los suscritos, si se observa que el fallo se apoya en una providencia dictada en un asunto absolutamente ajeno a la materia.
2. Defecto sustantivo , se presenta cuando: i) Se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexecutable por sentencias de control de constitucionalidad; ii) se contraria la <i>ratio decidendi</i> de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior; iii) se desconoce la parte resolutive de una sentencia de exequibilidad condicionada; o iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijados por la Corte Constitucional a través de la <i>ratio decidendi</i> de sus sentencias de control de constitucionalidad.	No se configura.
3. Defecto procedimental , cuando el funcionario judicial en el trámite de la actuación judicial desconoce la ritualidad previamente establecida	Se configura. Si procede en la medida que se violó el art. 29 de la C.P., desarrollado por el art. 7º de la ley 1149 de 2007 y el 336 del CGP, que imponen

para el efecto.	al operador la condición de <i>guardián</i> de los derechos fundamentales en todo momento, casando incluso de oficio una sentencia cuando se vulneran garantías y derechos constitucionales. El operador actuó contra la evidencia.
4. Defecto fáctico , que se presenta cuando el funcionario judicial carece del apoyo probatorio necesario "para aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Supone fallas sustanciales en la decisión atribuibles a deficiencias probatorias del proceso".	No se configura.
5. Error inducido , se configura cuando la decisión judicial adoptada resulta equivocada y causa un daño <i>iusfundamental</i> como consecuencia del engaño u ocultamiento al funcionario judicial de elementos esenciales para adoptar la decisión, o por fallas estructurales de la administración de justicia por ausencia de colaboración entre las ramas del poder público. Anteriormente denominado vía de hecho por consecuencia.	No se configura.
6. Decisión sin motivación , es decir, cuando las determinaciones adoptadas en la parte resolutive de la providencia y mediante las cuales se resuelve de fondo el asunto no encuentran en la parte motiva el fundamento o <i>ratio decidendi</i> , que permita a los destinatarios de las mismas ejercer un control sobre la razón de dichas decisiones y eventualmente controvertirlas.	No se configura.
7. Desconocimiento del precedente , que se configura por ejemplo cuando la Corte Constitucional ha establecido el alcance de un derecho fundamental, y éste es ignorado por el juez al dictar una decisión judicial en contra de este contenido y alcance fijado en el precedente. Igualmente cuando no se respeta el precedente del mismo órgano que dicta la providencia.	Se configura la violación del precedente horizontal toda vez que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado el REINTEGRO de nuestros compañeros de la FLA, a partir de la sentencia del señor JOHN RODRIGO ARBOLEDA ÁLVAREZ y otros, SL4782-2018 Radicación n.º 40289 Acta 41 M.P. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO.
8. Violación directa de la Constitución , defecto que se produce cuando el juez da alcance a una disposición normativa de forma abiertamente contraria a la Constitución, o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad debiendo hacerlo y así lo ha solicitado alguna de las partes en el proceso.	Se configura la violación directa de la Constitución , específicamente los arts. 2, 13, 29, 39 y 55. Mediante la violación de estas normas, se nos ha dado un tratamiento desigual y discriminatorio en relación con los demás demandantes de FLA a quienes se les ha reconocido el REINTEGRO por ser trabajadores oficiales; la violación del art. 39 es manifiesta, si se tiene en cuenta que se desconocieron todos los derechos de libertad sindical regulados en esa norma, y el 29 porque para decidir

	nuestro caso no se siguió el procedimiento indicado porque tenía que definirlo la Corte en Sala Plena, que definió los asuntos de la FLA.
--	---

PETICIONES DE TUTELA

Primera: Que se tutelen nuestros derechos fundamentales irrenunciables e imprescriptibles ya indicados, conculcados por los tutelados, y que como consecuencia se **declaren** las providencias impugnadas de la Corte Suprema de Justicia, incluidas los actos que resolvieron las nulidades propuestas, y la del Tribunal, como **radicalmente NULAS**.

Segunda: Que como consecuencia de las anteriores medidas de tutela, se proceda a dictar un fallo justo que acoja las pretensiones de la demanda ordinaria laboral, ordenando nuestro reintegro al Departamento de Antioquia - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- (FLA), en cumplimiento del precedente horizontal de la Corte Suprema de Justicia, radicación SL4782-2018, que falló los casos de los trabajadores de la FLA sentando *nueva* jurisprudencia.

Tercera: Cualesquiera otra(s) determinación(es) que el Juez Constitucional considere adecuada para resarcir plena e integralmente las garantías conculcadas, habida consideración a las amplias facultades de que está investido para hacer prevalecer la integridad y supremacía de la Constitución.

Quinta: Costas a cargo de los tutelados.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifestamos, que no se ha instaurado otra acción de tutela en relación con los mismos hechos y derechos.

PRUEBAS

I. Documentales

- Sentencias que se impugnan con esta tutela.
- Incidentes de nulidad con sus respectivas negaciones.

II. Exhortos.

Exhórtese a la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión N° 2 Laboral de Casación donde se encuentra el proceso en estos momentos, para que remita copia completa del proceso ordinario radicado: 05001310501620060090201, o el original a título de préstamo por economía procesal.

NOTIFICACIONES

Accionantes: CARLOS JULIO ZAPATA ZAPATA Carrera 72A # 114 - 22 int.
201 Tel 573 4531, Celular 311 762 91 88 email: calizapataz@gmail.com y/o montoyamesa@yahoo.es

Gonzalo Carmona Hoyos Carrera 7.^a #31 61 Girardota
Tel.297 57 13, cel. 312 821 22 03. No tiene correo electrónico

Martha Cecilia Rivas. Dirección: calle 140sur # 50-56.
Teléfono: 294-05-74. Celular: 3137276119. Email: martharivas926@gmail.com

Accionados: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión N°2, M.P. SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO, Calle 12 no. 7 – 25 Bogotá, Calle 12 no. 7 – 25 Bogotá. Email: des02slcortesupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, de fecha 13 de diciembre de 2010 MP Guillermo Cardona Martínez. Calle 14 48-42, Medellín, Antioquia. Email: des04sltsmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Atentamente,

 CC. 71 633 570
CARLOS JULIO ZAPATA ZAPATA


GONZALO DE JESÚS CARMONA HOYOS
CC. 3.487.908.


MARTHA CECILIA RIVAS CASTRO
Cc 32.483.860